

**Puerto Montt, veintiocho de febrero de dos mil veintidós.**

**Vistos:**

Ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt se sustanció, conforme a las reglas del procedimiento de aplicación general, la causa RIT O-534-2020 caratulada “González con Productos Fernández S.A.”.

Por sentencia definitiva de diez de agosto de dos mil veintiuno, el juez de la causa don Moisés Montiel Torres acogió la demanda interpuesta por don Rodrigo Andrés González Mancilla, en contra de su ex empleador Productos Fernández S.A., condenándolo a pagar el incremento del 30% de la indemnización por años de servicio y devolución de lo descontado por seguro de cesantía, sin costas.

Contra ese fallo la demandada dedujo tres causales, las que fueron invocadas una en subsidio de la otra. La del artículo 477 y las contempladas en las letras b) y c), ambas del artículo 478 del Código del Trabajo.

Solicita se acoja el recurso de nulidad fundado en las causales subsidiarias antes señaladas, y se anule en aquello que acoge la demanda interpuesta por el actor, en cuanto declaró que su despido era improcedente por la causal señalada en el artículo 161 inciso 2° del Código del Trabajo, es decir, desahucio escrito del empleador; y, en consecuencia, dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que declare que se rechaza la demanda interpuesta con expresa condena en costas.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que se escucharon alegatos de ambas partes.

**Y considerando:**

**PRIMERO:** Que, en relación a la primera causal, del artículo 477 del Código del Trabajo, entiende la demandada que incurrió en infracción de ley, por aplicación errónea del artículo 161 inciso segundo del Código del Trabajo, pues determinó que el despido por desahucio en la hipótesis de exclusiva confianza resultaba improcedente por no haberse probado que el actor ejerció una función de exclusiva confianza. En los considerandos décimo quinto a décimo octavo, razona el juez en el sentido que la exclusiva confianza se daría únicamente en los cargos que cuentan con facultades de representación del empleador en actuaciones de transcendencia económica para disponer o enajenar bienes de la empresa, y ejercer poder de dirección de la misma.



Razona en el sentido que el juez confundió las hipótesis que el propio legislador distinguió, pues entiende la causal comprendida dentro del caso de los gerentes, subgerentes, agentes y apoderados.

Por otra parte, estima que existió infracción al artículo 13 de la ley 19.728 en relación al artículo 168 del Código del Trabajo, pues el legislador autoriza al empleador a descontar el monto aportado al seguro de cesantía del trabajador, sin distinguir si el despido por la causal de desahucio se ajusta o no a derecho, y por su parte, el 168 sólo permite el recargo del 30% sobre la indemnización legal por años de servicio en caso de despido improcedente.

**SEGUNDO:** Que, la referida causal prevista en el artículo 477, se refiere exclusivamente sobre cuestiones de derecho, de modo que los hechos establecidos en la sentencia impugnada resultan inamovibles. Así las cosas, en el análisis de la causal invocada, esta Corte sólo tiene facultades para determinar si han sido o no bien aplicadas las normas legales que el solicitante estima infringidas a los hechos que se dieron por acreditados por el juez del grado.

De esta manera, se trata de una revisión del derecho aplicado en la sentencia, sin que, por esta vía, se puedan variar los hechos que han quedado inamoviblemente asentados en la sentencia impugnada.

La invocación de la causal importa que el recurrente acepta los hechos establecidos por el a quo, en base a la apreciación de la prueba rendida.

**TERCERO:** Que la cuestión controvertida esencial a determinar, se refiere a que, si la demandada acreditó los fundamentos fácticos de la causal de despido invocada, esta es, que el trabajador mantenía un cargo de exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter de tal, emane de la naturaleza del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 161 inciso segundo del Código del Trabajo.

**CUARTO:** Que en los motivos duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto del fallo impugnado, el juez, luego de hacer un análisis y ponderación de la prueba rendida en autos, del estudio de la normativa pertinente para la resolución de la cuestión debatida, de la descripción de las funciones que le correspondía ejercer al actor en el cargo que desempeñaba, concluye, en el motivo décimo sexto que el cargo que

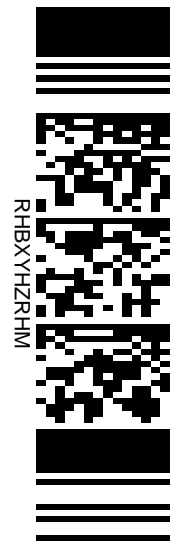


desempeñaba el demandante no era de exclusiva confianza de su empleador , atendida la naturaleza del mismos , pues, no tenía facultades de representación del empleador en actuaciones de trascendencia económica, no tenía poder para disponer o enajenar bienes de la empresa, y tampoco ejercía el poder de dirección de la empresa.

**QUINTO:** Que, efectivamente aparece del citado motivo décimo sexto, que el sentenciador del grado estableció como hecho inamovible de la causa que el cargo que desempeñaba el demandante no era de exclusiva confianza de su empleador. De esta manera, teniendo en consideración que la recurrente pretende que la sentencia de reemplazo tenga como antecedente que el actor sí mantenía un cargo de exclusiva confianza, y que en consecuencia resulta procedente la causal de despido invocada, en circunstancias que, partir de la prueba rendida en juicio y de su análisis y ponderación, en uso de las facultades y atribuciones que le son propias, quedó inamoviblemente asentado que ello no era efectivo, por lo que no se ve cómo la solicitud de la recurrente podría acogerse por la Corte, respetando los términos en que los hechos materiales fueron establecidos en su oportunidad; en tanto, como se aprecia del texto del recurso, la parte recurrente pretende en definitiva que al dictar la sentencia de reemplazo, necesariamente se sustituyan de esa forma en ella los hechos establecidos soberanamente por el tribunal competente; lo que, además de no poder hacerse, atenta en contra de lo dispuesto por el legislador, el que consagró a los Juzgados de Letras del Trabajo como tribunales de única instancia y a las Cortes de Apelaciones, como tribunales de nulidad.

Que, de esta manera, el recurso de nulidad, por la razón invocada será rechazado.

**SEXTO:** Que, asimismo, debe ser desestimada la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción al artículo 13 de la ley 19.728. La referida norma efectivamente permite imputar a la indemnización por años de servicios prevista en el artículo 163 del Código del Trabajo la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador mas su rentabilidad. Sin embargo, para hacer efectiva la referida imputación se requiere que la desvinculación haya sido declarada justificada. Por el contrario, si el despido se declara injustificado, desaparece la causa de la imputación, por lo no que no corresponde aplicarla



en los fondos de seguro de cesantía del trabajador al pago de las indemnizaciones por el despido. Que, en efecto, el artículo 13 de la ley 19.728, representa una regalía para el empleador que se ve enfrentado a una obligada reestructuración de su empresa y con ello materializar un despido en los términos del artículo 161 del Código del Trabajo. Que, tratándose de un privilegio excepcional se debe interpretar restrictivamente y por lo tanto se debe entender que el descuento opera única y exclusivamente para el caso en que medie el supuesto fáctico del citado artículo 161, cuestión que no se da en la presente causa, puesto que dicha causal fue declarada improcedente, transformándose el despido en injustificado por la cual se hace inaplicable la norma citada.

**SÉPTIMO:** Que así corresponde rechazar la causal de nulidad de la sentencia en cuanto no dio lugar a la imputación de los fondos de cesantía al pago de las indemnizaciones por despido, por estimarse que su aplicación no es procedente cuando existe un despido injustificado; que en consecuencia, el análisis de los antecedentes de la causa, de la prueba rendida y la interpretación de la ley en relación con éstos, efectuada en la sentencia, a criterio de esta Corte, se ajustó a derecho.

**OCTAVO:** Que, en relación a la segunda causal invocada, artículo 478 letra b), en concreto, una errónea aplicación de las máximas de la experiencia respecto de lo que debe ser entendido como cargo de exclusiva confianza. El yerro, según el fallo, está en que la máxima de la experiencia se refirió únicamente a la extensión y alcance de las facultades conferidas al trabajador y no al contenido de los servicios, lo que a su juicio es un error, desde que las facultades generales de administración podrían ser una máxima de la experiencia para establecer la hipótesis referida a los cargos de gerente, subgerente, agente y apoderados, más no a los cargos de exclusiva confianzas.

No se tomó en consideración, dice, la trayectoria laboral de 19 años del actor, el cargo, y las labores (incluso podía proponer quien sería contratado o no entre el equipo de ventas a su cargo), que daban cuenta que era un cargo de exclusiva confianza y era procedente su despido por desahucio.

**NOVENO:** Que, respecto de la presente causal de nulidad invocada subsidiariamente, esto es, la prevista en el artículo 478 letra b) del Código



del Trabajo, se entiende que el recurso de nulidad no puede servir de sede para debatir y resolver respecto del mérito de la prueba rendida y su valoración, cuestión que es privativa del juez que conoce del proceso, sino exclusivamente para revisar la vulneración o cumplimiento de la normativa que el ordenamiento reconoce a los intervinientes. La causal en estudio se refiere a la estructura de la sentencia, que garantiza la razonabilidad de la misma, la que acorde a las reglas de la sana crítica, no puede contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos afianzados, siempre que éstos sean manifiestos.

**DECIMO:** Que, en efecto, en el caso en estudio no se advierte el vicio que se denuncia como constitutivo de esta causal, puesto que de la lectura del fallo, en particular de sus considerandos duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto se advierte que el sentenciador analizó y ponderó la totalidad de la prueba incorporada al juicio, a la luz de los principios que informan la sana crítica, expresando las razones jurídicas, las simplemente lógicas y de las máximas experiencia, en cuya virtud les dio valor a las mismas, en los términos que le permitió arribar a la convicción que allí se señala y cuya decisión se contiene en lo resolutivo del fallo impugnado, esto es, que con tales antecedentes no se pudo probar que la demandante fuera de aquellos trabajadores a que se refiere el artículo 161 inciso segundo del Código del Trabajo, y que por lo mismo, al resultar improcedente el despido aplicado, le corresponde el pago de las indemnizaciones previstas en el artículo 168 letra a) del citado Código.

En conclusión, no cabe sino desestimar el presente recurso de nulidad.

**UNDECIMO:** Que, en relación a la última causal invocada, del artículo 478 letra c), da cuenta de los hechos establecidos en los considerandos quinto, décimo cuarto y décimo séptimo, y la errónea calificación jurídica aparecería en los considerandos décimo quinto a décimo noveno,

De los hechos acreditados, debió concluir, dice, que el cargo del actor tiene el carácter de exclusiva confianza y por tanto resulta procedente el despido por la causal de desahucio, ya que la trayectoria laboral de 19 años del actor, su cargo de Jefatura Zonal de Ventas, y las labores que realizó, entre las cuales, incluso, pudo proponer quién sería contratado o no entre el equipo de ventas a su cargo; son circunstancias más que suficientes para



entender que el contenido de los servicios prestados por el actor a su empleador suponían componente de confianza que se alejaba de la confianza que se tiene normalmente hacia la persona del trabajador, y permiten concluir que la confianza depositada en el actor resultaba preponderante y crucial en la relación laboral.

**DECIMO SEGUNDO:** Que nulidad prevista en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, está restringida a la circunstancia de que sea necesaria la alteración de la calidad jurídica de los hechos sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior, es decir, que de dichas conclusiones se desprenda indubitadamente que deba calificarse jurídicamente el cargo de la trabajadora, como de la exclusiva confianza del empleador.

**DECIMO TERCERO:** Que como se ha señalado, en el motivo décimo sexto se asentó que el cargo que desempeñaba el demandante no era de exclusiva confianza de su empleador, atendida la naturaleza del mismos, pues, según el fallo, quedó acreditado no tenía facultades de representación del empleador en actuaciones de trascendencia económica, no tenía poder para disponer o enajenar bienes de la empresa, y tampoco ejercía el poder de dirección de la empresa.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, del análisis de la nulidad aparece que el recurrente no pretende una alteración de la calificación jurídica de los hechos, sino que derechamente modificar éstos, y específicamente alterar la naturaleza del cargo que desempeñaba el demandante, transformándolo en de exclusiva confianza de su empleador, cuestión que le está vedado a esta Corte al conocer de la causal invocada, por lo que, por esta sola razón, el recurso de nulidad intentado, no puede prosperar.

En virtud con lo expuesto, y lo dispuesto en los artículos 456, 459, 477, 478, 481 y 482 del Código del Trabajo, se declara que **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por el abogado Sr. Manuel Maximiliano Garrido Jáuregui, en contra de la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno dictada por el Juez Titular del Juzgado de Letras de Puerto Montt Sr. Moisés Samuel Montiel Torres, sentencia que en consecuencia no es nula, sin costas del recurso, por estimar que el recurrente tuvo motivos plausible para alzarse.

Regístrese y notifíquese.



**Rol N ° 337-2021. Laboral**

Redactó el abogado integrante Mauricio Cárdenas García.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministra Presidente Gladys Ivonne Avendaño G., Fiscal Judicial Mirta Sonia Zurita G. y Abogado Integrante Mauricio Antonio Cardenas G. Puerto Montt, veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

En Puerto Montt, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

